



EDITORIAL: ¡NUEVAMENTE, LOS MILITARES EN SEGURIDAD INTERIOR!

Desde finales del año 2018, esta frase aparece en diversos medios académicos, registrando una gran preocupación en países que muy pronto conmemorarán los cuarenta años de retorno a la democracia, tras las dictaduras militares de los años setenta. La Revista Nueva Sociedad 278 (Noviembre - Diciembre 2018) se ocupa del tema con titulares como “¿quién custodia a los custodios?” democracia y uso de la fuerza en América Latina, de la politóloga argentina Ruth Diamint. Según su análisis, ellos reaparecen en la escena latinoamericana ya no desde el golpismo sino como parte de proyectos de seguridad pública interna. En Ecuador se reaviva el proyecto militar de Seguridad Nacional.¹ Los interesados pueden leer la revista online en el enlace mencionado al pie.²

Esta constatación viene aparejada con el evidente deterioro de la democracia en la región y con el aumento de una opinión pública punitiva favorable al uso de la fuerza.³ El tema ideológico, parece no importar. En Venezuela, élites militares han constituido una estructura extraña, que aporta doblemente al monopolio de la fuerza por parte de la dictadura, y desarrollan grupos civiles -milicianos- que replican y tratan de perpetuar la opresión de los ciudadanos. En el caso de gobiernos de otras tendencias, acosados por el caos que representa la inseguridad en todos los aspectos, les dan vía libre para que las viejas cúpulas doctrinarias de la seguridad nacional tengan la oportunidad de repetir sin ni siquiera actualizar, sus

estrategias de poder, a costa de las instituciones. Los altos índices de aprobación que alcanzan los militares en las encuestas, deberían preocuparlos porque, paradójicamente, esto los aletarga, por ello no se sienten conminados a renovar sus procedimientos. Podría incluso merecerles un atraso histórico inminente en cuestiones de defensa, ahora más complejas. Pensar que harán fácilmente tareas policiales es un error, desconocen las especificidades de estas misiones, no están dentro del ámbito jurídico correspondiente, estorbarán el desarrollo de la institución policial sin rédito ninguno para el país y solo contribuirán al fracaso de los gobiernos en esta materia.

Es necesario que se piense con más profundidad e innovación las estrategias y tecnologías militares, para proteger el territorio nacional por aire, mar y tierra como lo pide la Constitución. Lo correspondiente a Fuerzas Armadas es la estabilización de territorios y protección a poblaciones victimadas por criminalidad organizada (que efectivamente construyen geografías) y/o acciones de terrorismo, no la de perseguir delincuentes. Preocupa que los jóvenes militares del país no tengan en sus aulas la oportunidad de reflexionar sobre esto. En su lugar, los viejos doctrinarios los pueden reconducir al autonomismo institucional y a la competencia política haciéndolos proclives a la manipulación por fuerzas oportunistas. Todo ello, frente al caos en que se ha convertido la seguridad del país en todas sus dimensiones.

1. Para el análisis vale la pena revisar el Proyecto Ley de Código Orgánico de Seguridad del Estado presentado en la Asamblea Nacional, en octubre de 2018 por el Ministerio de Defensa; y el Libro Blanco de la Defensa, 2019.

2. Para acceder al artículo se puede revisar el siguiente enlace. <https://nuso.org/revista/278/otra-vez-los-militares-democracia-inseguridad-ciudadania/>

3. Para mayor información revisar: Zechmeister, E., Lupu, N., & Cohen, M. (2017). Democracia y gobernabilidad en las Américas: principales resultados del Barómetro de las Américas de LAPOP. Nashville: Vanderbilt University. <https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/ITB030es.pdf>

01 EDITORIAL
¡Nuevamente, los
militares en seguridad
interior!

02 LA SEGURIDAD
INTEGRAL: Objeto
de malentendidos
e interpretaciones
arbitrarias.
Bertha García Gallegos

04 EL RÉGIMEN
DE LAVADO DE
ACTIVOS EN EL
ECUADOR
Daniela Solano

07 ENTREVISTA:
Sistema judicial
ecuatoriano y crimen
organizado
Efrén Guerrero

09 REPORTAJE:
La Fiscalía General
del Estado desde una
perspectiva histórica
Cristina Chuquimarca

11 CRONOLOGÍA
Enero - Junio 2019

Los gobiernos, acudiendo a los militares y estos a sus antiguos patrocínios hemisféricos seguirán admitiendo aquella visión multidimensional de la seguridad, que lleva a la militarización de todo. ¿Qué pasa con las nuevas dimensiones de la defensa en

el mar, bajo las nuevas condiciones de la seguridad? ¿Qué pasa con la protección en tiempo real del espacio aéreo? ¿Qué pasa, ahora, con el reconocimiento y dominio real del territorio nacional? Hace poco tiempo una patrulla militar de infantería se perdió

en la selva de la frontera norte. No se puede en este caso y a estas alturas, aducir que esas son geografías difíciles y que no tenían los elementos tecnológicos necesarios.

LA SEGURIDAD INTEGRAL: OBJETO DE MALENTENDIDOS E INTERPRETACIONES ARBITRARIAS

Bertha García Gallegos*

1. Un mandato de la Constitución de 2008

Quienes la introdujeron venían de diversas disciplinas y actividades, donde las ideas de protección, mitigación -resiliencia-, precaución, se habían constituido en principios para orientar las conductas ante las posibilidades de riesgo o daño -aun cuando las amenazas no estuvieren todavía en etapas de consumación-. La Constituyente acogió las mejores ideas en torno a la seguridad, provenientes de los grupos de la sociedad civil organizada: ambientalistas, derechos humanos, justicia, seguridad ciudadana. Es posible pensar que la convocatoria a esa renovación constitucional permitió una adhesión entusiasta de la sociedad civil ecuatoriana a la nueva corriente política que prometía la revolución ciudadana.

En ese entonces, muy lejos quedaba aún el levantar sospechas acerca de que lo que se estaba gestando en realidad, era la instalación en el país de un modelo populista, ya presente en otros países de la región, en cuanto se identificaran las condiciones necesarias y suficientes; entre ellas, el contar con un líder capaz de enajenar a las masas a mediano o largo plazo. Una buena parte de los adherentes al movimiento primigenio lo fueron abandonando a los pocos meses, o al año. Por ejemplo,

lo hizo el movimiento indígena, los ambientalistas, los juristas neo constitucionalistas.¹ De modo que no se puede afirmar que la Constitución de 2008, con sus innovaciones y a pesar de los defectos que se le pueden señalar, fuera un producto del grupo que se consolidó en el poder una vez que “los revolucionarios” se fueron.

Es evidente que quienes se quedaron dentro de las líneas del régimen, tras la Constituyente empezaron a tomar decisiones en forma corporativa -a través del buró político, entidad no constitucional- no entendieron muchas cosas o tenían la esperanza de ir reformando o modulando progresivamente las instituciones, tal como ocurrió en Venezuela.²

En cuanto a la seguridad, uno puede pensar que estaban menos interesados en poner en práctica los conceptos introducidos, que en lograr la aquiescencia o sumisión de los militares y policías al proyecto político que empezaba a afianzarse en los círculos gubernamentales. Según uno de los principios de la doctrina asumida por la tendencia en el gobierno, el poder militar podía aplicarse a la consecución de la soberanía del partido en el poder, ya sea al exterior de la nación en relación con sus aliados, como a lo interno. La cuestión era cómo introducir el papel de la “comisaría política” dentro de las

fuerzas y en el entorno de las cúpulas más dispuestas a asumir estas formas de autoridad. En Ecuador, léase ministros y funcionarios colocados en posiciones claves para la modalidad de control civil deseada.

2. La ciencia y metodología de sistemas aplicada a la seguridad

Tras el final de la Guerra Fría, tal como fue conocida hasta los años noventa, todo lo que era seguridad cambió drásticamente, tanto en la realidad como en los conceptos. Para apreciarlo ligeramente, nada más dar un repaso a la cronología de este boletín y darse cuenta hasta qué punto han proliferado las amenazas, los desafíos y los riesgos y cómo se interceptan y alimentan entre sí para dar lugar a nuevas situaciones que las padecen los países, las comunidades y las personas. Pero también ha provocado un conjunto de nuevos aportes que provienen de las Ciencias Humanas.³

La Seguridad Humana apareció como el concepto unificador del nuevo paradigma de la seguridad a nivel mundial. La empezaron a desarrollar los países europeos occidentales para distanciarse de las estrategias de seguridad preventiva que se ensayaban como respuesta a la nueva forma de terrorismo internacional.⁴ Ya no es la Seguridad del Estado el objeto de previsiones, prácticas

1. Aguilar, Daniela. 2017. “Ecuador: balance de la política ambiental en la década de gobierno de Rafael Correa.” <https://es.mongabay.com/2017/05/rafael-correa-ecuador-ambiente/>.

2. En referencia a las enmiendas realizadas posteriormente, como la habilitación de las FFAA para actuar subsidiariamente en Seguridad Interior y otras como las introducidas en el ISFFA; ver entrevista Ministro de defensa. <https://www.defensa.gob.ec/fernando-cordero-la-seguridad-integral-tiene-como-eje-central-al-ser-humano/>.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible para las Ciencias Sociales y Humanas. La renovación de las Ciencias Humanas, un proceso impulsado por la UNESCO posicionó la Sociedad del conocimiento, la cultura de paz, la interculturalidad, la lógica de la complejidad y su reducción por los procesos sistémicos <https://es.unesco.org/sdgs/shs>.

4. Félix Arteaga, 2011. Una década de cambios en la seguridad tras el 11-S: de la globalización a la glocalización. (ARI) http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari125-2011

y acciones, sino la seguridad de las personas. La nueva forma de registrar el desarrollo de un país ya no se aprecia a través del Producto Interno Bruto (PIB), sino del grado de alcance de los objetivos del Desarrollo Humano. Los nuevos conceptos de seguridad, en todos los ámbitos y las dimensiones se entienden desde la perspectiva incremental de los derechos humanos, con enfoque en las vulnerabilidades sociales (como el género). En cuanto a las prácticas institucionales, tal perspectiva ha exigido ajustes importantes en las diferentes esferas de la disciplina, en las ya existentes y en las nuevas provocadas por las dimensiones reconocidas como inminentes de la seguridad.

Se acude al conocimiento, a la tecnología, a las experiencias históricas, a la capacidad de innovación de los Estados, de los científicos y los operadores. Todo debe renovarse, las instituciones, la capacitación de las fuerzas, los modos de ejercer las nuevas nociones de defensa en el campo del Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario; en el ámbito del apoyo policial al derecho y al orden público concebido como un espacio de vigencia de derechos en el entorno territorial del Estado. Como ya se dijo, también en el Ecuador, las nuevas ideas se filtraron a través del posicionamiento de la sociedad civil organizada y aparecieron como un mandato constitucional para producir todo un Sistema de Seguridad, no solo una Ley.

Traspassando las estructuras mentales preexistentes, allí estaban todas las ideas rectoras: seguridad humana, seguridad ambiental, seguridad alimentaria, derechos sociales de acceso al agua y a los recursos, protección de los pueblos no contactados, protección civil. El cuerpo de Ley que planteó el Sistema de Seguridad, al que se le llamó de Seguridad Integral, con el apelativo de Pública y Ciudadana, resultó como un

producto de la lucha política entre las fracciones de la izquierda radical, que es la que quedó a cargo de la gestión de todos los sectores de la seguridad: política exterior, ministerios de defensa, de seguridad interna y externa, inteligencia del Estado. Aprobada en septiembre de 2010, por lo menos no pudo desconocer ciertos principios constitucionales: las diversas dimensiones que debían administrarse por separado: la Defensa, la Seguridad Pública y del Estado, la seguridad ambiental, la protección de riesgos.

Una estructura de seguridad -en tanto Sistema y Estrategia del Estado- debía organizar el empleo de las fuerzas en primer lugar. Estas fuerzas deberían profesionalizarse y especializarse conforme a los parámetros más avanzados ya existentes en las democracias occidentales. El tema de riesgos y catástrofes por ejemplo, corresponden realmente a la sociedad civil organizada en términos de las especialidades de protección: Cruz Roja, bomberos, gobiernos locales, institutos científicos. No deben militarizarse. Está claro que las Fuerzas Armadas y la Policía, cada una según sus registros jurídicos y capacidades estén llamadas a contribuir en lo que se reconozca como específico de sus atribuciones; también el Sistema en su conjunto y cada uno de los subsistemas no pueden funcionar sin información especializada, oportuna y eficaz para la toma de decisiones; y en el caso del subsistema de Inteligencia del Estado, éste debe ser eminentemente analítico y propositivo.

3. El desconocimiento y la frustración

La Seguridad Integral no debe confundirse con aquellas conceptualizaciones de la “Seguridad Multidimensional” que desarrolló la Comisión de Seguridad de la OEA en México (2003), que terminó por hacer listados de las “nuevas amenazas” y la tendencia a utilizar a los militares para todo. Sintiéndose convocados

por gobiernos inconsistentes en el tema, los militares sienten que han recuperado los antiguos poderes y situaciones privilegiadas.

Si las amenazas, desafíos y riesgos a la seguridad se presentan hoy en día y proliferan de manera caótica; la Seguridad Integral -sistémica- no hace más que organizarlos a manera de subsistemas, profundizar en sus elementos constitutivos, no siempre evidentes, observarlos constantemente en sus desarrollos internos y sus capacidades de transformación⁵. En el plano operativo, tiene mayores exigencias de capacitación permanente de los operadores; la interconexión entre los sistemas, produce nuevos saberes que pueden ser aplicados por los administradores políticos a la política pública en cuestión. La sinergia resultante o esperada es lo mejor del sistema. Refleja un fenómeno por el cual actúan en conjunto varios factores, o varias influencias, incluso contradictorias, observándose así un efecto añadido al que hubiera podido esperarse operando independientemente. Este efecto se traduce en una práctica constante y progresiva, favorable a la prevención de los problemas, a la anticipación de respuestas y mitigación de los daños.⁶

4.- Los problemas de gestión y control

Tampoco ha sido fácil para los países delinear sistemas de gestión y control a partir de los sistemas o Estrategias de Seguridad Integral. Es importante revisar cómo lo hacen, y cómo lo han hecho. Pero una cosa es indiscutible, la gestión debe ser civil porque corresponde al Estado de Derechos. A este respecto, el sistema precisa la construcción de las capacidades civiles en los ámbitos de gestión y verificación con la ayuda de la educación del conocimiento y todo lo que ello implica.

En el caso ecuatoriano, como hemos visto, se dio el intento de tener un

5. A diferencia de las máquinas, los sistemas sociales -en donde pueden considerarse los sistemas de seguridad, producen comunicaciones, no están sujetos a los input u output. Nicklas Luhmann, los llama autopoieticos por su capacidad de auto transformación.

6. La sinergia es considerada entonces como una situación de integración óptima e los componentes del sistema. A un nivel más concreto, los fenómenos de sinergia se pueden identificar en aspectos muy diferentes de la realidad.

Sistema de Seguridad Integral aplicado a problemas de seguridad complejos e interactivos, como el previsto en la Constitución del 2008, pero no pudo ser desarrollado plenamente al interponerse intereses de poder político de tipo faccionalista. El proceso derivó en propuestas de control

burocrático de las instituciones, como aquellas de las Entidades de Seguridad, o las presentadas recientemente por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sustentadas en la doctrina de la Seguridad Nacional. Nadie ha pensado en los problemas reales cuya naturaleza deben

ser estudiados a profundidad.

* Profesora investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE. Dra. en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología por El Colegio de México.

EL RÉGIMEN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL ECUADOR

Daniela Solano Córdova*

DIMENSIONANDO EL LAVADO DE ACTIVOS

Además de haber promovido la movilidad de capitales, bienes y servicios, la globalización también ha contribuido para la mundialización del crimen organizado: sus problemáticas traspasan fronteras y requieren soluciones globales dado que los cambios tecnológicos han favorecido el ocultamiento del origen y destino de dinero, bienes y personas.

En los últimos años, la sociedad mundial dispone de un conocimiento más preciso y amplio sobre el delito del lavado de activos que anteriormente se limitaba exclusivamente al delito de lavado de dinero en asociación con el narcotráfico. La magnitud del fenómeno fue advertida por las autoridades competentes recién en los años 70, principalmente por su vinculación con sonados casos de narcotráfico en los países más desarrollados. En Estados Unidos de América, las alertas se prendieron cuando importantes investigaciones evidenciaron la presencia de sustanciales montos depositados regularmente sin justificación alguna en la banca; montos que según fuentes confiables provenían de la venta de droga en las calles (Tondini 2006, 5). Ahí mismo se detectó la participación de instituciones financieras en la introducción y legalización rápida y fácil de dinero ilícito en el mercado formal. Como respuesta, tradicionalmente se consideraba sólo la coordinación de medidas y esfuerzos entre el Estado y el sector financiero (Blanco, Fabián y Zaragoza 2006, 13). A raíz de los cambios de las últimas décadas, mu-

chos actores debieron sumarse para dar cumplimiento y desarrollar los mecanismos correspondientes para cuidar y proteger sus negocios lícitos de la contaminación del crimen organizado. El sistema financiero en su conjunto y los sectores no financieros se han ido incorporando como sujetos obligados a reportar a las entidades de control.

El aumento de la criminalidad deteriora las expectativas de democracia, debilita la legitimidad de los sistemas políticos, judiciales y policiales, distorsionando las economías por el poder corruptor del dinero. En resumen, el delito de lavado de activos se refiere al proceso mediante el cual se busca ocultar activos de origen delictivo o ilícito, transformándoles y dándoles el carácter de legal, para finalmente introducirlos en el sistema financiero formalmente establecido (Blanco, Fabián y Zaragoza 2006, 59-60). La tipificación como delito, o su tentativa, es relativamente reciente ya que el enfoque penal, por mucho tiempo, estuvo concentrado en los delitos que generan el dinero ilícito. La sanción del lavado era únicamente por vinculación a otro delito precedente grave, siendo generalmente el narcotráfico (Blanco, Fabián y Zaragoza, 2006, 14-44). El cambio radical surgió en 1986 cuando Estados Unidos criminalizó el lavado como delito independiente, para ser juzgado por derecho propio. De ahí en adelante, el lavado ya no está solamente asociado con ganancias provenientes del narcotráfico; ahora se relaciona con todo delito que genere réditos económicos. Al-

gunos delitos rentables son: tráfico de personas, de armas y explosivos, de recursos naturales; fraude financiero y en seguros; fraude informático, contrabando, extorsión, terrorismo y corrupción.

Una cantidad inmensa de dinero circula físicamente y supera lo que se produce en la realidad en bienes y servicios; generando gran dificultad a los países para controlar los capitales que entran y salen de sus fronteras, en particular en países dolarizados como el Ecuador. Los entendidos no se arriesgan a señalar montos y estadísticas vinculados con el lavado de activos a nivel país, región y mundo por la dificultad de medir las sumas que provienen de actividades ilícitas fuera de los controles establecidos. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el monto lavado anualmente está entre el 2% y 5% del PBI mundial; y que en Latinoamérica se ubica entre el 2,5% y 6,3% del PIB regional anual (Bautista et al. 2005, I). La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su informe anual 2017, menciona que el narcotráfico es el crimen transnacional que mayor dinero mueve en el mundo; más o menos USD 980 mil millones anuales, de los cuales el 44% se queda en países del continente americano y el 33% en Europa, primordialmente en Londres. Hay especialistas que estiman que, si ese dinero dejara de ingresar a la economía formal, se produciría la bancarrota de la economía global.

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)

El protagonismo de ciertos organismos internacionales ha sido fundamental en materia de prevención, control, detección y sanción del lavado de activos del crimen organizado. La ONU lideró la discusión mundial de temas relacionados con este delito en distintos foros: las convenciones y declaraciones no pasaron de ser buenas intenciones. Frente a esta debilidad, se recurrió al sistema de poder de la política internacional: el club de los países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Éstos extendieron un arbitrario conjunto de recomendaciones y prácticas para ser puestas en marcha por los países miembros y no miembros. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue creado por el G7 en julio de 1989, para combatir el lavado de activos. En abril de 1990, el GAFI, conformado entonces por 16 países, aprobó los primeros estándares en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos. Las denominadas “Cuarenta Recomendaciones del GAFI” han sido revisadas en varias ocasiones. La más reciente en el 2012, donde se incluyó las recomendaciones para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas (Financial Action Task Force, 2018). Este Grupo fue reconocido y legitimado treinta años después de su creación, como el regulador mundial en cuanto a estándares Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), con amplio mandato de duración indefinida. Los grandes apartados que prioriza el GAFI son: 1) la identificación de riesgos, 2) la aplicación de medidas preventivas en todos los sectores, 3) el establecimiento de atribuciones y responsabilidades, 4) la transparencia y disponibilidad de información; y, 5) la cooperación internacional.

El monitoreo y control a nivel mundial del GAFI se apoyan en nueve organismos regionales tipo GAFI (FSRB por sus siglas en inglés); y miembros observadores de dicho organismo: Asia Pacífico (APG), Centroamérica y el Caribe (GAFIC), Eurasia (EAG), África Oriental y del Sur (ESAAMLG), África Central

(GABAC), Latinoamérica (GAFILAT), África Occidental (GIABA), África del Norte y Medio Oriente (MENAFATF), Europa (MONEYVAL).

El Ecuador es miembro fundador -desde el año 2000- del GAFILAT, conformado por 17 países de América Latina con pleno derecho (de los cuales 3 son también miembros con pleno derecho del GAFI), y 17 observadores. El GAFILAT es miembro asociado del GAFI desde el 2006; e independiente tanto en lo administrativo-financiero como en lo técnico-político. No es una sucursal del GAFI como se lo caracterizó en varios medios de comunicación ecuatorianos a raíz de la inclusión del país en el listado público del 2010.

EL ECUADOR EN EL GAFI: INCUMPLIMIENTOS, PROBLEMAS Y ESTRATEGIA NACIONAL

Cumplir con las recomendaciones del GAFI no basta: lo técnico y lo político deben ir de la mano para velar por la seguridad mundial. El GAFI, en nombre del sistema mundial, manda que todos los Estados tengan como objetivo incrementar sus políticas de prevención y controles para reducir el lavado de activos dentro y fuera de sus fronteras. Más allá del cumplimiento de los estándares, hay aspectos políticos, tanto en el contexto internacional como nacional, a tomar en cuenta en el análisis.

La crisis financiera mundial de 2008 transformó al G20 de una comunidad política-técnica de ministros de Economía y Finanzas, al principal foro permanente de Jefes de Estado sobre gobernanza económica global para resolver los asuntos mundiales. A partir de la Cumbre del G20 en Londres 2009, el G20 tomó el papel central que antes ocupaba el G8 (Antuñano, 2010). Las repercusiones negativas detectadas a raíz de las crisis financieras elevaron las alertas por su rápida expansión y riesgos simultáneos en otros países y regiones; advirtiendo al mundo del alto riesgo de desestabilizar el sistema financiero regional e incluso global. Las principales áreas del problema detectadas

fueron: 1) débiles regulaciones bancarias, 2) prácticas crediticias peligrosas, 3) sectores mínimamente supervisados, 4) sistemas electrónicos poco o nada controlados; y, 5) aparición de instrumentos financieros exóticos -como los bonos soberanos de inversión, los fondos de capital de riesgo, los fondos de pensión, los fondos indexados (Mauro y Yafeh, 2007).

El Ecuador, sin ser miembro del GAFI, fue incluido en la lista pública de países no cooperantes en el 2010 por las deficiencias identificadas por dicho organismo. Además, errores políticos del gobierno de entonces fueron el detonante para ingresar, salir y reingresar en los listados públicos, permaneciendo por cinco años. Desde octubre de 2009, el GAFI pidió al Ecuador un compromiso político de alto nivel para superar las falencias en lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La tensión vivida entre el Ecuador y el GAFI entre el 2010 y el 2015, dejó expuesto al Ecuador ante el mundo. La primera reacción oficial del entonces presidente del Ecuador, el 26 de junio de 2012, fue: “... ni nos va ni nos viene lo que diga el GAFI, otro de los tantos instrumentos del neocolonialismo” (Diario El Comercio, 2012); declaraciones que no tuvieron repercusión ni consiguieron apoyo regional. El mayor problema fue la ignorancia del funcionamiento del GAFISUD y del GAFI por parte de los actores gubernamentales (Gudiño 2013, 48). El ignorar las comunicaciones enviadas por el GAFI y no actuar de forma oportuna fue el mayor descuido de quienes no supieron manejar la situación ni a nivel interno aún menos a nivel internacional.

El Ecuador recibió una comunicación el 17 de julio de 2009, suscrita por el presidente del GAFI y el Coordinador del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional de dicho Grupo (ICRG por sus siglas en inglés). Esta nota señalaba la decisión adoptada por la Plenaria del GAFI de junio de 2009 de incluir a Ecuador en una revisión más completa sobre la implementación de los estándares ALA/CFT. Las principales deficiencias identificadas por el GAFI incluían: 1) la no tipificación

del financiamiento del terrorismo, 2) el no contar con mecanismos para congelar, embargar o confiscar activos o bienes provenientes de actividades terroristas; 3) la necesidad de reforma a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, 4) la insuficiente supervisión sobre el sector financiero y de seguros privados, 5) la ausencia de supervisión a otros sectores en materia de prevención de lavado de activos. El procedimiento a seguir estaba claramente descrito. Los resultados de la evaluación del 2007 no representaron una preocupación para la administración de turno. Se evidenció la inexistencia de un mecanismo nacional de seguimiento interno, de coordinaciones a nivel interinstitucional para medir las políticas y acciones implementadas para superar las falencias detectadas en las evaluaciones mutuas. La importancia de la problemática del lavado de activos no estaba presente en las estrategias para proteger al país del crimen organizado.

En diciembre de 2009, en el XX Pleno de GAFISUD, la delegación ecuatoriana tomó conocimiento de que el IV informe de avance de la evaluación realizada al Ecuador en el 2007, solicitado en noviembre de 2009 al Coordinador Nacional, Ing. Víctor Hugo Briones, en su calidad de director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) nunca fue enviado al organismo. Por ende, no pudo ser presentado ni discutido en la Plenaria regional, recibiendo la sanción de primer nivel. Esta sanción no fue lo único: al no haber presentado ni aprobado ningún informe del Ecuador en esa Plenaria, el organismo regional no tuvo fundamentos para completar la revisión que estaba realizando el GAFI al país. La sanción recibida del GAFISUD afectó al país ante el GAFI por ser una muestra del poco compromiso con el organismo regional, y, por ende, con la problemática mundial y los esfuerzos globales por la seguridad e integridad financiera.

El 18 de febrero de 2010, el Ecuador fue incluido en la lista de países con deficiencias estratégicas ALA/CFT, con todas las repercusiones que

esto implicó (GAFI, 2010). La nueva máxima autoridad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), brazo operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), empezó a liderar el desarrollo del plan de acción continuo ALA/CFT, retomando el trabajo técnico activo para demostrar que el país estaba realizando avances que no fueron comunicados oportunamente.

El 6 de abril del 2010, el Ecuador presentó ante el GAFISUD el plan de acción con objetivos concretos, responsables y plazos, para superar las deficiencias notadas por el GAFI. El 4 de junio del 2010, el Procurador General como Presidente del CONCLA, presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley reformativa a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, incluyendo un articulado referente al financiamiento del terrorismo. Adicionalmente, envió al GAFI el compromiso de alto nivel político, adjuntando el informe de avances de acuerdo al plan de acción; información que ratificó personalmente en una reunión con el presidente de GAFI, en el marco de la Plenaria de junio de 2010.

A pesar de minimizar y hasta desconocer el papel del GAFI (Diario El Comercio, 2012), el gobierno ecuatoriano tuvo que ceder ante la presión internacional y las repercusiones por ser parte de una declaración pública del GAFI. Los esfuerzos a partir de marzo de 2010 lograron que la Plenaria del GAFI de 25 de junio de ese mismo año, excluyera al Ecuador de la lista de países con deficiencias estratégicas para ubicarlo dentro del proceso continuo de mejoras (GAFI, 2010). Sin embargo, la falta de coordinaciones serias y sostenidas con el GAFI devolvió al Ecuador a los listados en junio de 2012 (GAFI, 2012). De las revisiones que se realizaron plenaria tras plenaria, se desprendió que el país mantuvo las mismas deficiencias con mínimas variaciones, y por ende, representaba un riesgo a la comunidad internacional. En junio de 2015, la Plenaria del GAFI reconoció el compromiso de alto nivel político realizado por el Ecuador desde junio de 2010 y los avances

presentados técnicamente desde entonces; colocando al país en el listado de países en revisión continua (GAFI, 2015).

CONCLUSIONES

El Ecuador fue el último país de la región en aprobar la legislación ALA/CFT. En octubre de 2005, se promulgó la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, que creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y tipificó el delito de lavado de activos. El 30 de diciembre de 2010 se aprobó la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Lavado de Activos y Financiación del Crimen, derogando todo lo anterior. Esta ley tipificó el financiamiento de delitos, creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), multiplicó los sectores económicos considerados como sujetos obligados a reportar a la UAF. Una tercera ley fue aprobada en julio de 2016: la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, que derogó todo lo anteriormente sancionado. Esta última medida creó la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), haciendo hincapié en su autonomía administrativa, financiera y operativa. La UAFE, conforme al Art. 11, es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. Las facultades otorgadas a la UAFE abarcan actividades relacionadas con el análisis de la información financiera, comercial, tributaria, aduanera y demás, proporcionada por los sujetos obligados a informar y las instituciones públicas establecidas en la normativa. Esta información sirve para elaborar reportes de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, que permitan la investigación, procesamiento y juzgamiento correspondiente.

La UAFE es responsable de hacer cumplir la Ley y está autorizada para intervenir como parte procesal en los procesos iniciados por lavado de activos o financiamiento de delitos de

los que ha remitido algún reporte, realizar procedimientos administrativos y emitir sanciones. Más allá de formalidades y medidas para superar las deficiencias observadas incluidas en cada reforma, hay que evaluar la capacidad real que tienen la UAFE y otras autoridades competentes para dar respuesta eficaz y oportuna al trabajo, control y seguimiento de tanto sujeto obligado a reportar, tal como lo determina la Ley. La normativa actual exige cumplimiento básico, sin observar la contabilidad y existencia de controles internos auditables de los sujetos obligados a reportar. Una muestra de estas debilidades es el bajo número de casos efectivamente sancionados, y la poca o nula recuperación de activos y bienes involucrados en los delitos. Para lograr esta finalidad, es menester realizar una labor de carácter técnico que cuente con el compromiso real del gobierno de turno.

Los avances que ha realizado el Ecuador son evidentes en cuanto a normativa emitida y acciones ejecutadas para superar las deficiencias identificadas. Sin embargo, las autoridades deben preocuparse por ejecutar efectivamente las medidas implementadas y documentar los resultados; así como, enfatizar el trabajo coordinado y mejorar las herramientas de coordinación y cooperación con las contrapartes nacionales, regionales e internacionales. Si tan sólo tomamos en consideración el delito de narcotráfico y la enorme cantidad de droga incautada en los últimos años en el Ecuador, se ve la necesidad de identificar dónde está el dinero que permite su negociación, transporte, sobornos y demás gastos de la compra y venta. De acuerdo con el último

informe a la nación, presentado por el presidente Lenin Moreno, “entre 2017 y 2019 se incautaron (...) más de 200 toneladas de droga” (Presidencia República de Ecuador, 2019, pág. 36). Aún más preocupante, según el catedrático Fernando Carrión, es que “por Ecuador pasan 480 toneladas de droga anuales” (Revista Plan V, 2018).

Ante problemáticas transnacionales como el lavado de activos y el terrorismo, las amenazas militares ya no representan el mayor riesgo a la seguridad nacional. Es necesario contar con inteligencia, controles y regulaciones financieras estandarizadas y compartidas, que sobrepasen las fronteras para así poder luchar efectivamente contra el crimen organizado (Slaughter 2004, 288). Es una medida fundamental para atacar este problema transnacional el fortalecer las relaciones intergubernamentales y estrechar los lazos entre las autoridades de control. ¿Parecería fácil alcanzar esta cooperación y coordinación deseada! Sin embargo, hay países que ni siquiera logran que sus autoridades se pongan de acuerdo sobre las normativas y mecanismos internos necesarios para una lucha efectiva contra el crimen organizado. Slaughter (2004, 285) plantea que los Estados ya no pueden gobernar de manera aislada y propone la cooperación activa con otros Estados, a través del poder colectivo para intervenir en los asuntos compartidos.

* Daniela Solano Córdova, es magister en Relaciones Internacionales con mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos. Es consultora en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se desempeñó como directora general de la Unidad de Inteligencia Financiera del Ecuador y coordinadora nacional ante el Grupo de Acción Financiera de

Latinoamérica.

Bibliografía

- Antuñano, Isidro. 2010. “Las decisiones del G-20 y su impacto sobre los países más débiles”. En Documentación Social No. 158 (junio-septiembre), 31-47. Madrid: Cáritas Española.
- Bautista, Norma, Heiromy Castro, Ólivo Rodríguez y Alejandro Moscoso. 2005. Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos. OEA
- Blanco Cordero, Isidoro, Eduardo Fabián Caparrós y Javier Zaragoza Aguado. 2006. Combate del lavado de activos desde el sistema judicial. Washington DC: Fundación Imprenta de la Cultura.
- Diario El Comercio. (26 de junio de 2012). Rafael Correa: “Ni nos va ni nos viene lo que diga el GAFI”. Diario El Comercio.
- Financial Action Task Force. (2018). INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION. París: FATF.
- GAFI. (2010). FATF Public Statement - 25 June 2010. París: FATF.
- GAFI. (2010). FATF Public Statement - February 2010. París: FATF.
- GAFI. (2012). Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process - 22 June 2012. Roma: FATF.
- GAFI. (2015). FATF Public Statement - 26 June 2015. París: FATF.
- Gudiño, Daniel. 2013. “La construcción de un tangram político Ecuador y la lista negra del GAFI”. Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Mauro, P, y Yafeh, Y. (2007). “Las crisis financieras del futuro: ¿se asemejarán a las crisis generalizadas de la década de 1990 o a las crisis en países concretos en la década de 1890?”. Finanzas y desarrollo: Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, 44(4), 26-30.
- Presidencia República de Ecuador. (2019). INFORME A LA NACIÓN. Quito.
- Revista Plan V. (03 de septiembre de 2018). Guayaquil, la ciudad con más incautaciones de droga en Ecuador. Revista Plan V.
- Slaughter, Anne-Marie. 2004. “Sovereignty and Power in a Networked World Order”. Standford Journal of International Law, Vol. 40 No. 283. <<http://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/Stanford.pdf>>.
- Tondini, Bruno. 2006. “Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos”. En: CAEI: No. 20, Buenos Aires: CAEI.

ENTREVISTA: SISTEMA JUDICIAL ECUATORIANO Y CRIMEN ORGANIZADO

Dr. Efrén Guerrero Salgado *

Premisas: En las dos últimas décadas se han dado cambios en el Sistema Judicial y sobre todo en el Sistema Penal. Por otra parte, tenemos al crimen organizado como la amenaza más importante para la Seguridad y el orden Jurídico. Antes, el tema de la Seguridad Nacional estaba tratado desde la perspectiva militar casi únicamente.

Para hablar de este tema el equipo DSD ha entrevistado a Efrén Guerrero Salgado, Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE. Doctor en Gobierno y Administración Pública, Universidad Complutense de Madrid.

1. Si las amenazas a la Seguridad

son esencialmente delitos (delito organizado) y afectan incluso al Estado de Derecho, ¿Cuáles son las falencias que usted puede identificar en las estrategias de Seguridad del Ecuador, que ahora deberían incluir también al sistema judicial-penal y a otros campos del Sistema Jurídico?

En primer lugar, la falta de perspectiva de ver a los problemas de prevención del delito, la represión del mismo y la ejecución de penas como elementos desconectados entre sí. Debe tenerse en cuenta que, en el manejo de los problemas públicos, el derecho penal es de *ultima ratio*. Esto significa que en el manejo del delicado equilibrio entre velar por los derechos de la víctima y también de las personas que se encuentran en conflicto con la ley penal, con la finalidad de establecer una decisión apegada a la justicia pragmática. Además de todo esto, se deben evitar arbitrariedades, en observancia de la Constitución, la ley y los acontecimientos del caso, después de haber agotado todas las demás soluciones posibles. Creo que el problema inicial es uno de hipótesis: suponemos a la decisión de control de los delitos, como un tema de represión como única herramienta social. Eso, además de ser falso, es contrario a la lógica estructural del contrato social: si una persona quiere protegerse de los delitos, uno cede sus libertades a cambio de que la estructura estatal monte soluciones respetuosas de las normas, no generando un sistema más punitivo.

Eso puede verse en la actual emergencia carcelaria. Cualquier solución debe pensarse en relación a interrogarnos si todas las personas a) debían tener la cárcel como un castigo; b) si las más de cuarenta mil personas con calidad de privados de la libertad no son sino una muestra de un derecho penal máximo en el que se supone una venganza social incrementada por situaciones asimétricas de poder; y c) la solución no sólo pasa por gestionar la venganza social, sino por la reconstrucción de relaciones sociales destruidas por el cometimiento del delito. Todo esto obliga a un amplio debate social, amparado y cultivado desde las más altas instancias de gobierno.

2. Desde esa perspectiva, ¿Cuál es la situación actual del sistema judicial ecuatoriano? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?

Después de una amplísima reforma del sistema judicial ecuatoriano, incluyendo un sistema inquisitivo oral en la mayor parte de sus áreas, una reconversión masiva del ordenamiento

jurídico ecuatoriano y la supuesta renovación institucional, nos encontramos en un nuevo momento político. Este espacio se caracteriza por ausencia de liderazgos verticales, espacios en disputa en el plano democrático, y zonas de confrontación de poder fáctico. El caso del sistema judicial es uno de esos últimos, ya que, políticamente hablando, contar con el poder judicial, aumenta la preponderancia de un proyecto político durante y después del momento de control. Este hecho, unido a la tradicional opacidad de las instituciones, y falta de legitimidad, constituyen una brecha para el desarrollo y el ejercicio de los derechos no sólo en Ecuador, sino en el resto de la región. Enfrentar esta realidad obliga a asumir que la defensa del Estado de Derecho material es una necesidad ineludible y exige acuerdos de Estado que sobrepasen al sistema político.

3. ¿Cómo opera la cadena Fiscalía General, fiscales, jueces y Policía Judicial, frente a problemas como la trata de personas, lavado de activos y, en general, crimen organizado?

Debe entenderse a estos delitos como de tipo complejo, en los que hay varias actividades delictuosas que incurren en un patrón de daño a bienes jurídicos. Por ejemplo, en el caso de la trata de personas, la captación, el transporte y la explotación, (de acuerdo al Art. 1 del Protocolo de Palermo) muestran en muy contadas situaciones a una sola persona como sujeto activo del mismo. En el caso de varios delitos (trata de personas, tráfico de migrantes, o narcotráfico), es imprescindible para su cometimiento una estructura criminal que logre proveer recursos y medios. La diferencia es que su conexión es absolutamente no jerárquica o basada en lazos no formales ni controlados por el Derecho, mientras que su contraparte estatal está limitada por el derecho, controlada por el erario público y obligada a actuar democráticamente contra enemigos de la democracia. Eso es correcto y así debe funcionar el Estado, pero esta cadena de investigación, control, represión y castigo del delito, debe empezar a funcionar de forma más creativa, defendiendo derechos y asegurando que, a diferencia de la delincuencia, actúa con una ética de máximos.

4. ¿Cómo se trata el tema de Política Criminal e Inteligencia Criminal?

Debe pensarse como dos temas distintos. La inteligencia, como la recolección y análisis de información para tomadores de decisión jerárquicos, merece salir del anecdotario o los prejuicios, para volverse parte cotidiana de la acción del Estado. Eso supone más que una acción puntual, la construcción de una política de inteligencia. Para la jurisprudencia internacional, los operadores de la misma deberían tener una serie de límites:

a) ser respetuosos, en todo momento, de los derechos fundamentales de las personas, y b) estar sujetos al control de las autoridades civiles, incluyendo no solo las de la rama ejecutiva, sino también las de los otros poderes públicos, en lo pertinente.

En definitiva, las medidas tendientes a controlar las labores de inteligencia deben ser especialmente rigurosas, puesto que, dadas las condiciones de reserva bajo las que se realizan esas actividades, pueden derivar hacia la comisión de violaciones de los derechos humanos y de ilícitos penales.

5. ¿Qué opinión tiene sobre la participación de los militares en las acciones contra el crimen organizado?

Creo que eso implica un replanteo de las funciones que se encuentran en la Constitución, y debe tener en cuenta cual es el alcance de esa iniciativa. Así, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, han manifestado su preocupación por el hecho de que los militares ejerzan funciones de investigación, arresto, detención e interrogatorio de civiles, y que en algunos contextos y circunstancias, la alta presencia militar acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos. Por tal razón, vale la pena que haya una reglamentación, mediante protocolos de actuación claros de acción, y que haya actividades claras en el marco de competencias establecidas que no contravengan el orden jurídico.

REPORTAJE: LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

Cristina Chuquimarca Mosquera*

UN ORGANISMO FUNDAMENTAL

Desde el retorno a la democracia, el Ecuador ha transitado por un proceso constante de reformas legales e institucionales que han configurado de manera particular el andamiaje de la administración política y jurídica del Estado.

Entre los ámbitos e instituciones reformadas, destaca por la importancia que tiene actualmente, el Minis-

terio Público –hoy Fiscalía General del Estado-. Según los artículos 194 y 195 de la Constitución del Ecuador, este es un organismo autónomo de la Función Judicial, que dirige, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal o procesal penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. En estos mismos días, la Fiscalía General del Estado enfrenta grandes retos en la restitución de su credibilidad y fortaleza frente a

los hechos de corrupción política y delincuencia organizada que debe esclarecer.

A continuación, una cronología de los hitos esenciales en la estructuración de la Fiscalía General del Estado desde el regreso a la democracia (Constitución 1979) hasta la actualidad (2019), para entender consecuentemente sus alcances, límites y desafíos actuales.

Cuadro No.1 Hitos en la reforma de la Fiscalía General del Estado

Registro Oficial 800 de 27-mar.-1979	La Constitución de la República expedida mediante decreto supremo señala que: "el Ministerio Público será asumido por el Procurador General, los Ministros y Agentes Fiscales y los demás funcionarios que determine la ley (...) [misma que establecerá] sus atribuciones, deberes, las causas de su remoción y la forma de subrogación." (Constitución Política del Ecuador, 1979)
Registro Oficial 871 10-jul.-1979	Se expide la Ley del Ministerio Público, por la cual la Fiscalía General pasa a formar parte de la Procuraduría. Su función es ejercer el patrocinio público, expresado en el deber de intervenir como parte en los juicios penales que se sustancien en la Corte Suprema de Justicia o en Las Cortes Superiores Distritales. (Ley Orgánica del Ministerio Público, 1979)
Ley 0 Registro Oficial 763 de 12-jun.-1984	En la codificación de 1984 de la Constitución del Ecuador, la Procuraduría, antes autónoma, deja de tener personería jurídica; así mismo, se reduce de 5 a 4 años el período para ejercer las funciones de Procurador General. (Constitución Política del Ecuador codificación, 1984)
Ley 0 Registro Oficial 969 de 18-jun.-1996	A partir de las reformas constitucionales impulsadas en 1995, se modifican las funciones del Ministerio Público y sus atribuciones.
Registro Oficial 26 de 19-mar.-1997	Se expide la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, donde se establece su autonomía e independencia administrativa, económica y presupuestaria -separándolo de la Procuraduría del Estado-. Sus principales funciones asignadas son: d) Conducir las indagaciones previas y la investigación procesal penal ya sea por propia iniciativa en los delitos perseguibles de oficio o por denuncia; g) Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía Judicial, en las indagaciones previas en las etapas del proceso penal; i) Vigilar el funcionamiento del régimen penitenciario y la rehabilitación social del delincuente; k) Coadyuvar en el patrocinio público, para mantener el imperio de la Constitución y de la Ley (Ley Orgánica del Ministerio Público, 1997)
Decreto Legislativo 0 Registro Oficial 1 de 11-ago.-1998	La Constitución del Ecuador de 1998, inserta cambios sustanciales en el Ministerio Público y sus funciones, contenidos sobre todo en el art. 219.

Ley No. 19, publicada en Registro Oficial 100 de 16 de Junio del 2000	Se expide la Ley Reformatoria a la ley orgánica del Ministerio Público, a fin de que tenga concordancia con el nuevo texto constitucional.
Acuerdo Ministerial 1 Registro Oficial 289 de 21-mar.-2001	Se expide el reglamento orgánico funcional del Ministerio Público.
Decreto Legislativo 0 Registro Oficial 449 de 20-oct-2008	Con la aprobación de la Constitución del 2008, el Ministerio Público pasa a denominarse Fiscalía General del Estado, órgano autónomo de la Función Judicial que debe actuar "con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso" (Constitución política del Ecuador, 2008)
Desde 2008 hasta 2019	Se expide una serie de normas para reglamentar la designación de fiscales y demás autoridades, organizar el funcionamiento de la institución, su régimen disciplinario, administración de recursos, procesos y políticas institucionales.

Elaboración propia. Fuente: Base datos LEXIS

La figura del Ministerio Público aparece por primera vez en la Constitución de 1945 (Sánchez López, 2006), de allí, hasta 1996 formó parte de la Procuraduría General de la Nación, sin mayor claridad sobre su facultad investigativa. Solo a raíz de las reformas constitucionales de 1995, aparece el Ministerio Público como una entidad autónoma, encargada de conducir las indagaciones previas y la investigación procesal penal con el apoyo de la Policía Judicial. Los cambios constitucionales incluyen artículos sobre la prohibición de interrogatorios sin la asistencia de un abogado, la presunción de inocencia de la persona acusada, y la prohibición de prisión preventiva sin orden de una autoridad competente. Ecuador ha sido uno de los últimos países en la región en adoptar estas medidas básicas para garantizar los derechos humanos. Textualmente, los artículos añadidos señalan:

[Art. 22 numeral 19, literal f] (...) Ninguna persona podrá ser interrogada, ni aún con fines investigativos, por una autoridad policial, por el Ministerio Público o por cualquier otra del Estado, sin la asistencia de un abogado defensor privado o, nombrado por el Estado para el caso de que el interesado no pueda designar a su propio defensor. Cualquier diligencia judicial, preprocesal o administrativa que no cumpla con este precepto carecerá de eficacia probatoria;

g) Se presume inocente a toda persona mientras no se haya declarado su culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada;

h) Nadie será privado de su libertad sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la Ley, salvo delito flagrante, en cuyo caso tampoco podrá mantenerse sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. En cualquiera de los casos, no podrá ser incomunicado por más de veinticuatro horas; e,

i) Toda persona será informada inmediatamente de la causa de su detención (...). (Constitución Política del Ecuador codificación, 1996)

SECCION III

Del Ministerio Público

Art. 141.- El Ministerio Público se ejerce por el Ministro Fiscal General, los ministros fiscales distritales, los agentes fiscales y demás funcionarios que determine la Ley.

Art. 142.- El Ministro Fiscal General debe reunir los requisitos exigidos para ser Ministro de la Corte Suprema de Justicia y durará cuatro años en sus funciones. Su designación la hará el Congreso Nacional de terna enviada por el Presidente de la República. Tendrá las atribuciones, facultades y deberes que determine la Ley. Dentro del Cumplimiento de sus obligaciones, el Ministerio Público conducirá las indagaciones previas y la investigación procesal penal con el apoyo de la Policía Judicial. (Constitución Política del Ecuador codificación, 1996, pág. 30)

La Constitución de 1998, establece nuevas atribuciones y cambios en la institución, contenidos sobre todo en el artículo 219 que señala lo siguiente:

(...) El Ministerio Público prevendrá en el conocimiento de las causas, dirigirá y promoverá la investigación preprocesal y procesal penal. De hallar fundamento, acusará a los presuntos infractores ante los jueces y tribunales competentes, e impulsará la acusación en la sustanciación del jui-

cio penal. Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministro Fiscal General organizará y dirigirá un cuerpo policial especializado y un departamento médico legal. Vigilará el funcionamiento y aplicación del régimen penitenciario y la rehabilitación social del delincuente. Velará por la protección de las víctimas, testigos y otros participantes en el juicio penal. Coordinará y dirigirá la lucha contra la corrupción, con la colaboración de todas las entidades que, dentro de sus competencias, tengan igual deber. Coadyuvará en el patrocinio público para mantener el imperio de la Constitución y de la ley (...). (Constitución Política del Ecuador, 1998)

EL CAMBIO DEL SISTEMA INQUISITIVO AL ACUSATORIO

Cuando entró en vigencia el Código de Procedimiento Penal (2000), al cambiar el sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio y oral, se definió para la fiscalía un rol central en el proceso penal; esto porque el nuevo sistema "concibe al juez como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes; y al juicio como una contienda entre iguales iniciada por la acusación, a la que compete la carga de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público y resuelta por el juez según su libre convicción" (Ferrajoli, 2001, pág. 564)

Finalmente, con la promulgación de la Constitución de 2008, el Ministerio Público pasó a denominarse Fiscalía General del Estado, consolidando así sus funciones dentro del nuevo sistema penal.

LA RESPUESTA DE LA FISCALÍA FRENTE A LOS NUEVOS DESAFÍOS

Dados los altos niveles de impunidad y corrupción presentes en el país y la región, resulta imperativo fortalecer las capacidades de la Fiscalía como institución encargada de llevar a cabo investigaciones imparciales y apegadas al debido proceso. Aunque el trecho entre la realidad actual y el deber ser aún es largo en este tema; el camino para el fortalecimiento de las instituciones de administración de justicia, sin duda no debe ser la

refundación o reforma constante. Tema recurrente en la historia del Ecuador y en la coyuntura actual. No hay que olvidar que “el diseño de las instituciones tiene que responder al proyecto político de la sociedad en su conjunto y estar asentado en el mayor consenso posible para que sea legítimo. No se puede caer en el error de hacer normas a la medida del gobernante o de la coyuntura” (Sánchez López, 2006).

* Socióloga e investigadora en el Programa Democracia, Seguridad y Defensa – PUCE.

Bibliografía

Constitución Política del Ecuador. 1979, 1998, 2008. Quito. R.O. 800; 0; 0.
Codificación de la Constitución Política del Ecuador. 1984, 1996. Quito, R. O. 763; 969.
Ferrajoli, L. (2001). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Editorial Trotta S.A.
Ley Orgánica del Ministerio Público. (1979) (1997). Ley Orgánica del Ministerio Público. Quito: R. O. 871; 26.
Sánchez, F. (2006). Uso y abuso de la reforma en Ecuador: reflexiones generales con énfasis en lo electoral. ÍCONOS 25, 9-19.

CRONOLOGÍA DE NOTICIAS ENERO-JUNIO 2019

NARCOTRÁFICO: PRESENCIA DEL CARTEL DE SINALOA

Desde el 2015 se identificaron redes delictivas ecuatorianas vinculadas al cartel de Sinaloa: Según investigación de la Revista Plan V, desde 2015, ‘El Chapo’ Guzmán tejó una red delictiva compleja en Ecuador. Captó a bandas locales para la logística y custodia de las pistas clandestinas para el transporte de drogas y dinero ilícito. Además, para que vigilen cargamentos ilegales que parten, en lanchas rápidas o barcos. En este mismo año, el Departamento de Estado de EE.UU. señaló que el Cartel de Sinaloa operaba con emisarios en Ecuador. *Plan V, 14 de diciembre de 2018.* **Telmo Castro fue detenido en 2013 en un caso de drogas vinculado con ‘El Chapo’ Guzmán.** *El Comercio, 21 de diciembre de 2018.* **Secretaría de Justicia presenta pruebas sobre irregularidad en el proceso de liberación de Telmo Castro, ex-capitán del Ejército vinculado al delito de narcotráfico.** *El Comercio, 17 de diciembre de 2018.* **Durante el juicio que se sigue a El Chapo Guzmán en Nueva York, se reveló que él y su socia Agustina Cabanillas alias ‘La Fiera’, planeaban crear una empresa en Ecuador para el lavado de activos:** También se reveló que el Chapo tenía acceso

a los correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto de sus allegados. Estos teléfonos ayudaron al FBI a recolectar evidencia en contra suya. *El Universo, 9 de enero de 2019.* **Militares y funcionarios judiciales de Ecuador fueron señalados, una vez más, en el contra ‘El Chapo’ Guzmán:** Alex Cifuentes, ex socio de Guzmán señaló que en Ecuador se retiraban tarjetas de débito cargadas con \$9.900 para lavar dinero. También habló de un soborno a un juez ecuatoriano de 500 mil USD para arreglar el caso de Telmo Castro y sobre la compra de armas a militares activos de las FFAA. *El Universo, 15 de enero de 2019.* **Habría otras empresas fantasmas para el lavado de activos:** Líneas aéreas Lincandisa S.A, Team Business S.A. y Gestorum S.A, se encuentran dentro de las 822 registradas en el SRI y actualmente ya fueron disueltas y puestas en liquidación. Testigos del juicio contra ‘El Chapo’ informan que Ecuador estaba en la lista de sus países favoritos para lavar dinero. *El Universal, 18 de febrero de 2019.*

OPERATIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Este Observatorio ha registrado aproximadamente 70 operativos policiales desde enero a mayo de 2019. Se destacan solo los casos que pre-

sentan extraordinaria movilidad y astucia en las modalidades de ocultamiento de drogas desde los puertos y en las carreteras del país.

En 2018, Bélgica decomisó en Amberes unas 50 toneladas de cocaína enviada desde América Latina: El gobierno Belga informó que esta incautación de droga es un record y representa un aumento del 22% con respecto al 2017. La droga viene principalmente de Colombia, Brasil, Ecuador, Surinam, Chile, Perú, Costa Rica y Panamá, escondida entre la mercancía de los contenedores o en la estructura de los mismos. *El Universo, 11 de enero de 2019.*

Policía antinarcóticos decomisó 353 paquetes de droga en las provincias de Tungurahua y Napo: En un camión que tenía como ruta Coca-Tena - Guayaquil. *El Comercio, 11 de enero de 2019.* **Se decomisan 200 kilos de droga en la vía Baños-Pelileo, provincia de Tungurahua:** Policía Nacional identificó a una organización internacional de narcotraficantes dedicada al transporte de droga de origen colombiano hacia la provincia de Manabí para luego ser enviada a Centroamérica y México. *El Universo, 12 de enero de 2019.*

En Letonia decomisan dos toneladas de cocaína proveniente de

Ecuador: La policía letona, en colaboración con la policía ecuatoriana y la DEA, decomisó más de dos toneladas de cocaína proveniente de Ecuador. Los bloques estaban almacenados en 42 cajas de banano de exportación. Durante el operativo fueron detenidos 5 ciudadanos letones. *El Universo*, 14 de enero de 2019.

Policía ecuatoriana con ayuda de guardacostas norteamericanos incauta 792 kilos de droga a 190 millas de las costas de Esmeraldas, escondida en una lancha con doble fondo en aguas internacionales con destino hacia México. *El Comercio*, 17 de enero de 2019.

Unidad Antinarcóticos de Guayaquil allana vivienda que funcionaba como centro de acopio para microtráfico: Tras investigación, se allanó una vivienda en la ciudadela Mucho Lote 1, que funcionaba como centro de acopio y distribución de droga. También se detuvo a 25 personas dedicadas al microtráfico en las provincias de Guayas y Loja. *El Universo*, 18 de enero de 2019.

Cinco detenidos en operativo antidroga: se enviaba las sustancias desde las playas de Manta hasta las lanchas en alta mar. *El Universo*, 26 de enero de 2019.

Policías son investigados por filtrar información a redes delictivas: Durante un operativo en la Zona 8 (Guayaquil, Durán, Samborombón), la Policía Antinarcóticos capturó a alias El Moro y a otras cinco personas vinculadas al delito de microtráfico. Durante su captura, Alias El Moro aseguró tener contacto directo con policías activos que lo mantenían informado sobre los operativos e intervenciones. Walter Villarroel, jefe de Antinarcóticos de la zona 8 asegura que se está investigando a

los policías implicados. *El Universo*, 30 de enero de 2019.

Autoridades del Cauca interceptan a bus cargado de droga en ruta hacia Ecuador: Llevaba 95 kilos de cocaína en un doble fondo en la bodega. El bus cubría la ruta Cali – La Hormiga (Putumayo) con destino a Ecuador. *El Tiempo*, 28 de enero de 2019. **Se encuentra más droga escondida en una segunda inspección a bus interceptado en el Cauca:** Encuentran 200 paquetes más de clorhidrato de cocaína en el bus mencionado. *El Tiempo*, 31 de enero de 2019.

Municiones de fusil fueron abandonadas en una vía de Carchi: Un cargamento de municiones fue abandonado en la carretera Tulcán – Tufiño, por un auto de placas colombianas. En el paquete se encontró 214 municiones calibre 5,56mm y dos alimentadoras de fusil HK. *El Comercio*, 31 de enero de 2019.

Policía incauta una tonelada de droga en la provincia del Guayas: La Policía Nacional realizó tres operativos en tres cantones de la Provincia del Guayas donde se decomisó, en total, una tonelada de droga. Un inmueble servía como centro de acopio. *El Comercio*, 3 de febrero de 2019.

170 kilos de cocaína decomisados en una vivienda al norte de Guayaquil, ciudadela Guayacanes: La Policía Antinarcóticos informó que la droga iba a ser enviada fuera del país a través de la modalidad de Gancho Ciego. *El Universo*, 8 de febrero de 2019.

Hallan droga en bodega de una empresa de transporte de pasajeros en Esmeraldas: La Unidad de Antinarcóticos en colaboración con el grupo élite de la Policía Nacional, realizaron un control en la bodega

de encomiendas de una Cooperativa de Transportes de Esmeraldas. *El Universo*, 12 de febrero de 2019.

Policía decomisa 15 cajas con municiones en un operativo en el norte de Quito: *El Comercio*, 13 de febrero de 2019.

Policía decomisa 23 kilos de droga en Cuenca en una tienda de ropa: Según el jefe de policía, el local servía como pantalla para esconder las actividades de microtráfico. *El Universo*, 14 de febrero de 2019.

Las mafias estudian las rutas y destinos de las exportaciones: Equipos de Inteligencia confirman que en el Puerto Marítimo de Guayaquil y en Puerto Bolívar, cada semana se descubre al menos un caso de droga. Los productos con más tendencia a ser contaminados con cocaína son banano, mango, piña, camarón y pescado y su destino principal es Europa. Las mafias captan a personas encargadas de vulnerar la seguridad de la Policía y Aduana e introducen los paquetes. La Policía tiene canes adiestrados, un escáner fijo y uno móvil, pero esos controles no son suficientes pues las autoridades admiten que solo el 10% de la carga de exportación es revisada en los puertos de Guayaquil. *El Comercio*, 15 de febrero de 2019.

81 kilos de marihuana decomisados en el cantón Huaquillas: La droga tenía como destino Chile. *El Universo*, 26 de febrero de 2019.

Una tonelada de droga fue hallada dentro de cajas de banano en Puerto Bolívar: La Policía Antinarcóticos retuvo un contenedor de banano que era utilizado para el envío de una tonelada de droga a través del puerto marítimo de Puerto Bolívar, en El Oro, hacia Bélgica y Holanda. En el contenedor designado a una asociación de productores de ba-

nano se encontraron 1000 bloques tipo ladrillo. *El Universo*, 30 de marzo de 2019. **Policía desarticula red que enviaba droga a Europa desde Puerto Bolívar en contenedores de banano:** El operativo se ejecutó en las ciudades de Machala, Macará y Santo Domingo. Los agentes de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos con Coordinación Europea (UIACE) ejecutaron nueve allanamientos. *El Comercio*, 17 de abril de 2019.

Ocho personas fueron detenidas por delitos de narcotráfico en la Refinería del Pacífico (El Aromo): Entre ellos dos policías, y guardias de las instalaciones, además se confiscaron vehículos, armas y dinero, en un operativo antinarcóticos realizado en las instalaciones de la Refinería del Pacífico. Una avioneta interceptada se dio a la fuga. *El Comercio*, 1 de abril de 2019. **Entre los detenidos están dos miembros de la Policía, uno en servicio activo y otro pasivo:** Los implicados fueron trasladados a la cárcel de El Rodeo, en Portoviejo. *El Comercio*, 2 de abril de 2019. **Ministra del Interior relata los hechos del operativo en los predios de la Refinería del Pacífico en El Aromo:** Informó que la operación se dio porque la Policía tenía pistas de las actividades y no descartó que este caso esté relacionado con otros. Reconoció que hay que mejorar los controles de detección. *El Universo*, 2 de abril de 2019.

Ocho detenidos en operativo contra organizaciones narcodelictivas en tres provincias de Ecuador: La Fiscalía junto a la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos y la Coordinación Europea de la Policía Nacional realizó un operativo donde se detuvo a ocho personas, relacionadas con una banda asociada a delitos de narcotráfico que enviaba droga vía marítima con destino a Europa. Este operativo se realizó en Machala,

Loja y Santo Domingo. *El Universo*, 17 de abril de 2019.

Policía incauta droga en operativo en las oficinas de Correos del Ecuador: En un operativo realizado a Correos del Ecuador, en las oficinas Quito y Guayaquil, se detuvo el envío de cocaína oculta dentro de una consola musical y frascos de chimichurri. La droga tenía como destino Australia y Liberia. *El Universo*, 18 de abril de 2019.

ESPACIOS AÉREOS Y MARÍTIMOS VULNERABLES AL NARCOTRÁFICO

Policía colabora con la FAE y la DAC para detectar naves ilegales: El general Marco Villegas, jefe nacional Antinarcóticos informó que las organizaciones delictivas aprovechan el espacio aéreo durante la noche para las actividades ilícitas. Villegas sostuvo que la Policía coordina con la FAE y la Dirección de Aviación Civil para controlar esta modalidad y controlar las pistas de aterrizaje irregulares. *El Comercio*, 4 de abril de 2019. **Existen limitantes tecnológicas para el control del espacio marítimo:** La vía marítima es uno de los canales que usan las organizaciones delictivas para el tráfico de drogas. La Policía ha detectado diversas formas que usan los narcos para contaminar cargas de exportación. La zona del golfo de Guayaquil no cuenta con un sistema que sirva para el control del tráfico marítimo y que ayude a detectar posibles acciones ilegales. *El Universo*, 6 de abril de 2019. **Existen más de 2000 pistas de aterrizaje no controladas que están siendo aprovechadas por redes de narcotráfico:** Esto ha sido aprovechado por las redes de narcotráfico para movilizar droga en Ecuador. Según Mauricio Campuzano, Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, existen más de 2.000 pistas de aterri-

je “no controladas” en el país. La FAE realiza vuelos permanentes de reconocimiento y si detecta alguna irregularidad, notifica a la Dirección de Aviación Civil para que realice la inspección necesaria y la autorice o la clausure. *El Universo*, 7 de abril de 2019. **Policía Nacional asegura que los narcotraficantes han fortalecido las operaciones aéreas para actividades ilegales:** Según la Dirección Nacional Antinarcóticos, desde el 2003 hasta abril de 2019 se han hallado 21 avionetas en operativos contra el narcotráfico. Todas estas fueron localizadas en la costa. Según la policía las mafias transnacionales han “fortalecido” sus operaciones aéreas. Para los investigadores, este fenómeno responde a un “robustecimiento” del poder económico de las redes delictivas. *El Comercio*, 1 de mayo de 2019.

CASO SECUESTRO PERIODISTAS EL COMERCIO

Consejo de Seguridad Pública conminado a desclasificar información: Familiares de los periodistas del Diario El Comercio, secuestrados y asesinados por narcodelicuentes hace un año, en la zona de Mataje, limítrofe con Colombia, solicitan que el Consejo de Seguridad Pública del Estado (COSEPE) permita la desclasificación de todas las reuniones del consejo en donde se trató la situación de los periodistas. *El Universo*, 2 de enero de 2019. **COSEPE califica como “grave delito” la filtración de un audio sobre caso El Comercio:** El Ministro de Defensa solicitó a la Fiscalía premura en las investigaciones al respecto. *El Universo*, 3 de enero de 2019. **En el audio el presidente afirma que “La dignidad de un pueblo y del Estado vale más que la vida de una o pocas personas”:** Esto aviva la polémica generada en los medios de comunicación sobre el proceso de investigación y rescate de los tres

periodistas secuestrados. *El Espectador*, 6 de enero de 2019. **Asamblea exhorta al Ejecutivo desclasificar información sobre asesinato del equipo periodístico de El Comercio:** La resolución recibió el apoyo unánime de 106 legisladores presentes en la sala. *El Universo*, 16 de abril de 2019.

FRONTERAS VULNERABLES; REDES, GRUPOS ARMADOS, TRÁFICO DE PERSONAS

Policía Antinarcóticos son atacados por delincuentes liderados por Pedro Goyes alias ‘Sinaloa’ en Sucumbíos: Al menos 15 hombres se abrieron paso con ráfagas de fusil. Aquí perdió la vida el Cabo Cesar Topón y dos uniformados resultaron heridos. La Policía reaccionó frente a este acto y varios delincuentes resultaron heridos. Estos llegaron a un centro médico de Putumayo, donde fueron interceptados por la policía colombiana. Los delincuentes fueron identificados como parte de una red liderada por alias “Sinaloa”, disidente de las FARC. Ecuador emitió circular roja a través de la Interpol para capturarlo. *El Tiempo*, 14 de enero de 2019. **Sucumbíos alberga a grupos armados liderados por alias ‘Sinaloa’ y ‘La Constru’:** Ambas redes coordinan el paso de droga desde el Putumayo colombiano hasta Sucumbíos. Tras el ataque a la patrulla en Sucumbíos se creó el Consejo provincial de Seguridad Ciudadana integrado por policías, militares, fiscales y otros funcionarios. *El Comercio*, 29 de enero de 2019. **Las provincias fronterizas de Sucumbíos y Esmeraldas tienen la mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes:** La ministra del interior, María Paula Romo, anunció esta cifra como evidencia de la complicada situación que existe en la frontera entre Ecuador y Co-

lombia. En el mismo discurso recalcó que en 2018 se aprobó el Plan Integral de Desarrollo Fronterizo que busca aumentar la presencia del Estado en la frontera y parte con la presencia de 193 unidades de policía fijos y 2019 móviles en los que están asignados 4.715 policías. *El Universo*, 8 de febrero de 2019. **Policía colombiana detiene a nueve personas implicadas en la producción y distribución de químicos para la producción de cocaína asociados con alias ‘La Constru’:** Después de un año de investigación se logró desarticular a esta organización que distribuía a laboratorios de cocaína de Cundinamarca, Huila, Putumayo, Cauca y Nariño. El permanganato de potasio era producido por la misma organización, mientras que los otros dos químicos eran adquiridos a través de empresas fantasmas. *El Espectador*, 12 de marzo de 2019. **Cancillería ecuatoriana despliega misión a zona fronteriza para la protección de 175 personas:** Tras los acontecimientos violentos registrados en el sur de Colombia, por los cuales alrededor de 200 personas se movilizaron forzosamente a la parroquia Palma Real, provincia de Esmeraldas. La Cancillería emitió las respectivas visas humanitarias. *El Comercio*, 24 de marzo de 2019.

Informe revela nexos entre funcionarios del Estado ecuatoriano con el comercio de mujeres sometidas a esclavitud sexual: Según el informe “La trata ante el espejo: una aproximación a la explotación sexual en el trabajo esclavo,” investigación de campo realizada entre 2011 y 2012, financiada por la cooperación internacional y contratada por el proyecto de Fomento de Seguridad Integral en Frontera Norte, existen cuatro provincias de la frontera norte donde opera una gigantesca mafia de trata, sometidas a condiciones

de esclavitud sexual. El informe fue silenciado por las autoridades de la época, debido a los lazos existentes entre jefes policiales, fiscales y otros administradores de justicia, con el comercio o trata de mujeres en la frontera con Colombia. El informe relata el *modus operandi* de esa red, y cómo policías, administradores de justicia y funcionarios estatales les brindaban seguridad siendo cómplices de este delito. *Plan V*, 29 de abril de 2019. **Autoridades de cuatro países se reúnen para ratificar el Convenio de Cooperación Policial contra el Crimen Organizado Transnacional:** El acuerdo tiene el respaldo de la Unión Europea, en apoyo a la Comunidad de Policías de América y tiene como fin intercambiar información operativa para investigaciones conjuntas, datos de Inteligencia; lista de sospechosos y personas desaparecidas o secuestradas, y de esta forma luchar contra el narcotráfico, tráfico de personas, de armas, contrabando y demás redes delictivas. *El Comercio*, 12 de marzo de 2019.

MINISTERIO DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS

Ministerio de Defensa realizó el lanzamiento del Libro Blanco de la Defensa: Tiene cinco objetivos estratégicos: ejercer el control efectivo del territorio nacional, apoyar a las instituciones en la protección de la población, fortalecer las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, contribuir a la cooperación internacional y al desarrollo nacional. *El Universo*, 9 de enero de 2019. **Fuerzas Armadas intensifica controles en Esmeraldas:** Aproximadamente 300 militares participan en los patrullajes de control en las carreteras. *El Universo*, 14 de febrero de 2019.

El Comandante del Ejército se pronuncia respecto a militares procesados por delitos de drogas y venta de armas: El general Javier Pérez afirmó que los militares investigados por casos de droga y venta de armas no deben arrastrar en esta inconducta a la institución y a sus familias. *El Comercio*, 9 de enero de 2019. **Trece procesados, entre ellos seis militares, por tráfico de armas a 'Guacho' fueron trasladados a Quito para investigación:** Seis militares y siete civiles fueron acusados de tráfico de armas y municiones de origen militar hacia 'Guacho'. *El Comercio*, 11 de enero de 2019.

Oswaldo Jarrín dio su versión en caso de contrabando de armas por militares ecuatorianos al frente ilegal Oliver Sinisterra: El ministro de Defensa acudió a la Fiscalía General del Estado para dar su declaración sobre el caso de la venta de armamento y municiones militares al frente ilegal Oliver Sinisterra. Según fuentes oficiales su versión no aportó al proceso de investigación. *El Comercio*, 22 de febrero de 2019.

Dos militares esperan sentencia por tráfico de drogas en zona fronteriza de Carchi: La Fiscalía Provincial del Carchi procesa a dos militares en servicio activo, detenidos transportando marihuana y cocaína, en agosto del 2018. Los dos miembros de las Fuerzas Armadas, fueron aprehendidos con 209.734 gramos de marihuana y 19.788 gramos de cocaína, transportados en una camioneta. El arresto se realizó en un control móvil de Fuerzas Armadas. *El Universo*, 14 de marzo de 2019.

Oswaldo Jarrín confirma adquisición de equipamiento para militares que resguardan la Frontera Norte: En su informe de labores de 2018, el Ministro de Defensa, informó que recibirán nuevo equipa-

miento, municiones y dispositivos de protección para los militares que resguardan la frontera norte. Dijo además, que se conformó la Fuerza de Tarea Conjunta para resguardar las poblaciones de Esmeraldas. *El Comercio*, 27 de febrero de 2019.

Fuerzas Armadas anuncia respaldo a patrulla militar que mató a un civil en Mataje, Esmeraldas: Las Fuerzas Armadas anunciaron su total respaldo a la patrulla militar de 11 integrantes que participaron en un incidente de control de armas, en el que una persona falleció y un niño quedó herido. El general Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, señaló que la patrulla militar estaba cumpliendo órdenes. *El Universo*, 18 de marzo de 2019.

Ministro de Defensa aseguró que se reforzarán las actividades de seguridad contra el narcotráfico en Manabí: El ministro Oswaldo Jarrín, exclamó que en el país no hay indefensión y que se trabaja para combatir el narcotráfico. Estas declaraciones las realizó tras las avionetas detectadas en Montecristi y en los terrenos de la Refinería del Pacífico. El ministro aseguró que en Manabí hay un radar, pero que está "degradado". Indicó que tiene 30 años de vigencia. *El Comercio*, 5 de abril de 2019.

COOPERACIÓN INTERESTATAL EN SEGURIDAD

Ejércitos de Ecuador y Brasil participan en reunión para potenciar alianzas: Las Fuerzas Armadas de Ecuador y Brasil participaron en la tercera edición de la Reunión del Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa entre los dos Estados. Se trataron varios temas de interés en materia de defensa. Se habló de explorar y desarrollar iniciativas cooperación de mutuo beneficio, así como también, intercambiar infor-

mación sobre los desafíos actuales en materia de defensa. *El Comercio*, 20 de febrero de 2019. **Ecuador y Colombia construirán centro binacional en Mataje:** El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, anunció la construcción de un centro binacional ubicado en territorio colombiano, frente al puente de Mataje. Esto permitirá mantener a los dos países una mejor regularización, control de los intercambios, flujo de personal y funcionamiento comercial. En Cali, militares de Colombia y Ecuador se reúnen para tratar asuntos fronterizos: En la XIII Reunión de Mandos Regionales de Frontera. El encuentro busca intercambiar experiencias para ejecutar operaciones conjuntas que permitan atacar los delitos transnacionales. *El Comercio*, 5 de marzo de 2019. **El Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos se reunió con el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín:** Hablaron de las operaciones del avión Orión P3 que sobrevuela las costas del país para monitorear barcos ilegales del narcotráfico y del entrenamiento de militares ecuatorianos. Jarrín destacó la importancia de fortalecer los lazos con EE.UU. *El Comercio*, 25 de abril de 2019.

Fiscales de Ecuador y Colombia firman "Protocolo de Confidencialidad en Materia de Cooperación Judicial Internacional": Este acuerdo busca reafirmar el compromiso de ambas instituciones para tratar solicitudes judiciales en materia penal en un ámbito reservado y confidencial con el fin de intercambiar información para combatir organizaciones criminales poderosas y peligrosas. *El Universo*, 14 de febrero de 2019. **Perú y Ecuador acuerdan acciones conjuntas contra las actividades ilegales:** En la reunión se decidió intensificar la cooperación contra la trata de personas, la minería ilegal, la extracción

ilegal de madera, el tráfico ilícito de especies y el robo de vehículos, entre otras actividades ilícitas. La reunión concluyó con la firma del acta que aprueba el Plan Operativo Anual Binacional 2019 del Eje de Seguridad y Defensa, que contiene 11 compromisos, 25 actividades y 63 tareas. *El Comercio*, 8 de marzo de 2019.

CRISIS CARCELARIA

Comandante de Policía dice que asesinatos son planificados por bandas criminales al interior de las cárceles: El general Paulo Terán, de la Policía Nacional, comentó que los numerosos asesinatos recientes se dan entre bandas delictivas. *El Universo*, 8 de mayo de 2019. **El Gobierno declaró estado de excepción en el sistema de rehabilitación social del Ecuador:** El presidente Lenín Moreno lo declaró a través del Decreto Ejecutivo 741, que tiene como objetivo “atender las necesidades emergentes de dicho sistema a fin de precautelar los derechos de las personas privadas

de libertad como grupos de atención prioritaria”. En el Decreto se reconoce la precariedad de las condiciones en los centros. *El Comercio*, 16 de mayo de 2019.

Militares vigilan exteriores de cárceles de Ecuador por creciente inseguridad: El Ministerio de Defensa de Ecuador anunció que, conforme a una disposición presidencial, las Fuerzas Armadas del país participan en la vigilancia externa de los centros de rehabilitación social ante la creciente inseguridad que se vive en ellos. *El Comercio*, 15 de mayo de 2019. **Ministro de Defensa dice que los militares no pueden hacerse cargo del primer filtro de las cárceles:** El ministro de Oswaldo Jarrín puntualizó que los militares no pueden hacerse cargo del primer filtro de las cárceles, sino solo de la seguridad externa. Esta explicación la dio luego de que el director de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño y la ministra del Interior plantearan

que los militares se encarguen del primer filtro. *El Comercio*, 22 de mayo de 2019.

ANÁLISIS

La lucha contra el narcotráfico en América: Desde que Estados Unidos inició la “guerra” contra las drogas en los años setenta, el castigo social del narcotráfico persiste en Latinoamérica y la discusión sobre el enfoque de esa lucha sigue sobre la mesa. Para muchos expertos ha quedado claro que ésta es una guerra perdida que debe ser replanteada. *El Tiempo*, 27 de marzo de 2019. **El Poder Militar en América Latina según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos:** Según el último reporte de *The Military Balance* 2019 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, en América Latina, los ejércitos aún continúan enfocados en los conflictos internos. *El Espectador*, 5 de marzo de 2019.



Pontificia Universidad
Católica del Ecuador

Comité Editorial:

- Bertha García Gallegos
- Francisco Rhon Dávila
- Juan Pablo Aguilar
- Marco Romero Cevallos

Asesoramiento Internacional:

- Dra. Sonia Alda - Real Instituto Elcano - España
- Dr. Gustavo Suárez Pertierra - UNICEF - España
- Dr. Louis Goodman - American University (USA)

Investigadoras:

- Cristina Chuquimarca M.
- María Luisa Rivadeneira.

Programa Democracia, Seguridad y Defensa

Dirección: Av. 12 de Octubre y Patria. Universidad Católica. Torre 2, piso 9, oficina 901.

Teléfonos: (593-2) 299 1700 ext. 1474 / 1041

e-mail: bgarcia@puce.edu.ec

Este boletín forma parte de los proyectos de vinculación con la colectividad de la PUCE

Correspondencia y solicitud de ejemplares: programa.dsd.puce@gmail.com

